

Editorial

MARIAN SIMÓN ROJO
Madrid (España), marzo de 2013.

Cuando un tercio de la población urbana de los países “en desarrollo” vive en tugurios, es difícil plantear un escenario optimista en el que el derecho a la vivienda y a la ciudad sean una realidad. Subyugados por la crudeza de las cifras, todavía en demasiados foros se entiende que la incapacidad para satisfacer las necesidades de alojamiento adecuado se debe a un problema de escasez de recursos. Pero ¿nos enfrentamos realmente a un problema de escasez? Para responder a esta cuestión es interesante asomarse a los datos, razonamientos y conclusiones del *Informe sobre Desarrollo Humano 2006* del PNUD, titulado *Más allá de la escasez: Poder, pobreza y la crisis mundial del agua*. Con la vivienda sucede como con el agua: la escasez nace de la desigualdad en riqueza y poder, no de la disponibilidad física.

Frente a la insistencia en la escasez a la que nos tienen habituados nuestros políticos y economistas, la teoría del *Desarrollo a Escala Humana*, propuesta por MAX-NEEF, ELIZALDE y HOPENHAYN se apoya en la utilización de recursos abundantes no convencionales, como la solidaridad, que se incrementan en la medida en que se comparten. Aprovechando que la teoría cumplía un cuarto de siglo, se celebró en octubre de 2011, en la *Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid*, el *Congreso Anual N-aerus* centrado en «La ciudad a escala humana», que resultó ser el germen del boletín que ahora ve la luz.

Hablar de escala humana supone poner en el centro del desarrollo a las personas, auténticas protagonistas del proceso de satisfacción integral de sus necesidades.

A través de varios de los artículos del boletín se puede hacer un recorrido desde las estrategias más básicas de supervivencia de los habitantes de las aceras en Dacca (Bangladés), explicados por NUSRAT SHOMA, hasta la conquista de espacios de autogestión en la producción social del hábitat en Chile o Argentina, pasando por el reconocimiento por parte de los gobernantes de una deuda social en Bogotá, para desarrollar proyectos de mejora barrial en los que profesionales cualificados trabajan en estrecha colaboración con la comunidad.

Como dejan patente prácticamente todos los artículos, es esencial hacer visibles las estructuras de poder que subyacen a la desigualdad urbana. Se analizan espacios de resistencia —que se repiten a lo largo de la historia y de la geografía— en unas luchas desiguales entre élites y pobladores, en las que la burocracia y los mecanismos del poder político y económico lastran las posibilidades de las personas con menos recursos para participar en los beneficios económicos de la ciudad. DOAA ABOUELMAGD, al presentar el caso de El Gran Cairo, nos recuerda el planteamiento de POLANYI sobre los tres modelos de integración económica que condicionan la manera de satisfacer las necesidades humanas: reciprocidad, redistribución e intercambios de mercado. No basta con asumir la limitada capacidad institucional para atender a las demandas crecientes de la población, es imprescindible relacionar esa limitación o ineficacia con la capacidad de las élites del poder financiero para imponer sus intereses por encima de los de la población, ya sea de manera directa (en convivencia con el poder político) o indirecta. En esta línea, desde Buenos Aires, CABRERA y SCHEINSOHN nos explican cómo las políticas de regulación estuvieron fuertemente determinadas tanto por una lucha de intereses (entre los poderes públicos y privados) como por una dinámica institucional que fue perdiendo paulatinamente —a través de las décadas— su legitimidad social y su capacidad para actuar de manera autónoma en resguardo del interés público.

Analizar la realidad es el primer paso para entenderla y poder actuar. Para actuar, es necesario además dotarse de herramientas que permitan a los pobres defender sus intereses y superar su histórica situación de indefensión. Es lo que propone TUKWASIIBWE en su artículo sobre herramientas para las negociaciones sobre el acceso a la tierra o sobre los desarrollos urbanísticos en los terrenos donde viven o desarrollan sus actividades los habitantes más pobres. No hay que olvidar que estos pobladores suelen partir de una situación de inferioridad en lo que se refiere al acceso a recursos y a conocimiento legal y técnico, con problemas de reconocimiento legal o anulación de sistemas de propiedad y uso tradicionales.

Frente a estas carencias de los pobladores, CAGE plantea el potencial de las organizaciones de pobres urbanos en la construcción del capital social y político de las comunidades marginales. El caso de las organizaciones de Kisumu, en Kenia, le permiten señalar cómo pueden los pobladores aprovechar y enriquecer su capital social y político para incidir en la toma de decisiones institucionales que influyen decisivamente en sus condiciones de vida. Son procesos que no están exentos de conflictos internos, en los que juegan un papel clave las habilidades y capacidades de los interlocutores, los contactos y el apoyo en redes.

Por otra parte, a través de los casos de Brasil, Colombia, Argentina y Chile, DIMURO y DE MANUEL, DÁVILA y DASTE, CASTILLO, SCHEINSOHN y CABRERA nos muestran cómo cuando se da un contexto favorable abierto a la participación, con estados permeables a las reivindicaciones de los pobladores organizados, las actuaciones tienen un mayor impacto, mejorando el bienestar de la población y dando pie al escalamiento de soluciones. En sus artículos podemos encontrar ejemplos de proyectos de mejora del entorno barrial, de acceso a vivienda y promoción económica, de huertos urbanos y de producción y gestión habitacional, que nos proporcionan suficiente material para reflexionar y para intentar trasladar enfoques exitosos de resistencia y gestación de alternativas basadas en la aplicación de satisfactores sinérgicos que contribuyen a avanzar hacia ese desarrollo a escala humana que preconizaban MAX NEEF, ELIZALDE y HOPENHAYN. Porque, como nos recuerdan las luchas sociales en todo el planeta, hay que reequilibrar poder y riqueza.

Conviene que en nuestras sociedades no lo perdamos de vista, para no claudicar ante la imposición política y económica de pseudosatisfactores o satisfactores inhibidores, de los cuales sabemos mucho en muchos de nuestros países, en Latinoamérica, sometidos a ajustes estructurales en décadas pasadas, o en el arco Mediterráneo, acosado por los feroces recortes sociales de la actualidad.